

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, once (11) de noviembre de 2020

AUTO INTERLOCUTORIO

MAGISTRADO PONENTE: RONALD OTTO CEDEÑO BLUME

MEDIO DE CONTROL:	DE	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LABORAL
EXPEDIENTE:		76001-23-33-000-2019-00990-00
DEMANDANTE:		LILIANA MARIN MALDONADO laurapulido@lopezquinteroabogados.com ; notificacionescartago@lopezquinteroabogados.com
DEMANDADO:		NACION – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - FOMAG
ASUNTO		REMITE POR COMPETENCIA

La señora LILIANA MARIN MALDONADO, a través de apoderada judicial, mediante el ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, solicitó la nulidad del acto ficto que negó el reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas causadas en los años 1989 a 1992 y el pago de la sanción moratoria.

Como restablecimiento del derecho, solicitó se reconozca y paguen las cesantías definitivas de los años antes mencionados y la sanción moratoria.

Inicialmente, el proceso fue repartido al Juzgado Segundo Administrativo Oral de Cartago, quien mediante auto del 17 de octubre de 2019¹, dispuso la falta de competencia para conocer del mismo en razón de la cuantía y ordenó su remisión a esta Corporación.

Encontrándose en esta instancia el Despacho dispuso mediante auto nro. 072 del 28 de enero de 2020², inadmitir la demanda, para que aclara el ítem respecto a la cuantía y para que allegará copia del oficio nro. 0537 del 2 de octubre de 1989.

El 10 de febrero de 2020³, dentro del término legal, la parte demandante aportó memorial de subsanación allegando escrito de la demanda donde estima la cuantía, sin allegar copia del oficio requerido. Teniendo en cuenta lo anterior, el despacho se pronunciará nuevamente sobre el factor de la competencia respecto a la cuantía.

Respecto a la estimación de la cuantía, el Consejo de Estado⁴ recordó que la fijación de los perjuicios causados tiene como finalidad determinar quién es el juez competente para conocer de un determinado proceso. Sobre el particular se ha expresado que:

“Cuando en la demanda se formulen varias pretensiones, la cuantía del proceso se determinará por el monto de la pretensión mayor formulada por cada uno de los demandantes. Así, se tiene que los perjuicios por daño moral, daño emergente y lucro cesante son pretensiones autónomas entre sí y respecto de cada demandante, por lo

¹ Ver folio 45

² Ver folio 84

³ Ver folios 85 a 110

⁴ Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección A, C.P. MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO, providencia 19 de febrero de 2019, Radicación número: 11001-03-26-000-2018-00197-00(62962).

tanto, no se pueden sumar para efectos de determinar la cuantía de las pretensiones formuladas por cada uno de ellos⁵. (subrayas por fuera de texto).

Al momento de estudiar la competencia funcional, se debe analizar de manera individual cada una de las pretensiones de aquellos que se consideran lesionados, para así determinar si es dable admitir o no la demanda.

El numeral 2 del artículo 155 del C.P.A.C.A, establece lo siguiente:

“Art. 155. Competencia de los jueces administrativos en primera instancia. Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
(...)

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Ahora bien, el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011 establece:

“ARTÍCULO 157. COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen. En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones.

Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor.
(...)

La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella.

(....) (Subrayas y negrillas por fuera de texto)

Es preciso aclarar que, el artículo 157 del CPACA cuando refiere que no se pueden tener en cuenta los perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de la demanda, debe entenderse como aquellos valores que aún no se han causado y que el actor pretende le sean reconocidos como consecuencia necesaria y directa del no pago oportuno de sumas reclamadas como principales⁶.

En el presente asunto, la parte demandante estimó la cuantía⁷ por la liquidación de las cesantías definitivas en un valor de \$ 825.614, por intereses a las cesantías \$ 2.858.747 y por la sanción moratoria \$ 117.378.942, para un total de \$ 121.063.303 según sumatoria de las sumas consignadas en cuadro visible a folio 25, por lo que consideró que la competencia por cuantía corresponde a esta Corporación.

Teniendo en cuenta las previsiones del artículo 157 del CPACA, en el presente asunto se pretende la nulidad del acto ficto que negó la liquidación de las cesantías de los años enunciados y como consecuencia de ello el pago los intereses y de la sanción moratoria, se observa entonces que estas últimas resultan ser pretensiones accesorias, pues para que éstas puedan ser reconocidas debe ser como consecuencia necesaria de la nulidad en la liquidación de las cesantías, por lo que al ser pretensiones accesorias no deben tenerse en cuenta para la determinación de la cuantía.

⁵ Consejo de Estado, auto de 28 de marzo de 2007, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. En igual sentido se ha pronunciado el Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E) en auto de 2 de mayo de 2016.

⁶ Consejo de Estado – Sección Tercera, C.P. MAURICIO FAJARDO GÓMEZ, radicación 50001233100020120019601 (48152)

⁷ Ver folio 25

Realizadas las anteriores previsiones, se tiene que la pretensión en este asunto equivale a \$ 825.614, el cual resulta inferior a los 50⁸ SMLMV, por lo que debe darse aplicación al numeral 2 del artículo 155 del CPACA y la competencia para conocer en primera instancia el presente asunto radica en los juzgados administrativos.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 168⁹ del C.P.A.C.A. se ordenará devolver el expediente por competencia al Juez Segundo Administrativo del Circuito de Cartago– Reparto, quien deberá observar el inciso tercero del artículo 139¹⁰ del CGP aplicable por remisión expresa del artículo 306¹¹ del CPACA.

En consecuencia; se,

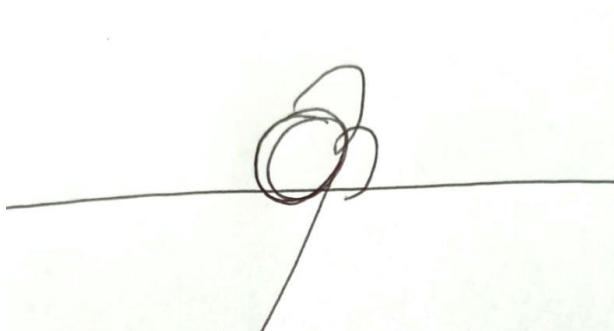
RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE COMPETENCIA en razón de la cuantía, para tramitar el presente proceso, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído.

SEGUNDO: DEVOLVER por competencia en razón a la cuantía al Juez Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Cartago (REPARTO), las presentes diligencias.

SEGUNDO: Por Secretaría de esta Corporación realizar las anotaciones pertinentes en el sistema Justicia Siglo XXI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



RONALD OTTO CEDEÑO BLUME
Magistrado

⁸ Salario mínimo 2019 828.116 * 50 = 41.405.800

⁹ ARTÍCULO 168. FALTA DE JURISDICCIÓN O DE COMPETENCIA. En caso de falta de jurisdicción o de competencia, mediante decisión motivada el Juez ordenará remitir el expediente al competente, en caso de que existiere, a la mayor brevedad posible. Para todos los efectos legales se tendrá en cuenta la presentación inicial hecha ante la corporación o juzgado que ordena la remisión

¹⁰ ARTÍCULO 139. TRÁMITE. Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenará remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente solicitará que el conflicto se decida por el funcionario judicial que sea superior funcional común a ambos, al que enviará la actuación. Estas decisiones no admiten recurso.

El juez no podrá declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo por los factores subjetivo y funcional.

El juez que reciba el expediente no podrá declararse incompetente cuando el proceso le sea remitido por alguno de sus superiores funcionales.

El juez o tribunal al que corresponda, resolverá de plano el conflicto y en el mismo auto ordenará remitir el expediente al juez que deba tramitar el proceso. Dicho auto no admite recursos.

Cuando el conflicto de competencia se suscite entre autoridades administrativas que desempeñen funciones jurisdiccionales, o entre una de estas y un juez, deberá resolverlo el superior de la autoridad judicial desplazada.

La declaración de incompetencia no afecta la validez de la actuación cumplida hasta entonces. (subrayas fuera de texto).

¹¹ ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.